

Bolivia, revisando los años '90: políticas antinarcóticos, injerencia de los Estados Unidos y movimientos de resistencia. “¡Kawsachun coca, Wañuchun yanquis!”.

Grande, Patricio.

Cita:

Grande, Patricio (2017). *Bolivia, revisando los años '90: políticas antinarcóticos, injerencia de los Estados Unidos y movimientos de resistencia. “¡Kawsachun coca, Wañuchun yanquis!”*. XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-019/164>

XVI JORNADAS INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS DE HISTORIA

Mesa N° 29:

“La región andina. Conflictos sociales, procesos socio-económicos, cultura e identidad (Siglos XX y XXI)”

Título de la ponencia:

Bolivia, revisando los años ‘90: políticas antinarcóticos, injerencia de los Estados Unidos y movimientos de resistencia. “¡Kawsachun coca, Wañuchun yanquis!”

Autor:

Grande, Patricio (Universidad Nacional de Luján)

“PARA PUBLICAR EN ACTAS (SI)”

1. Introducción

¡Kawsachun coca, Wañuchun yanquis!

La injerencia de los Estados Unidos de América en torno a las “políticas antinarcóticos” en Bolivia constituye un vasto y complejo campo de estudios para la investigación histórica. Desde hace ya algunos años existen aportes investigativos con diversas miradas provenientes no sólo del campo de los estudios históricos sino también de otras ciencias sociales como la sociología, la antropología y la politología. Sobre esa base, en la ponencia se recuperan y revisan algunos de esos aportes, al tiempo que se profundiza en el estudio de los llamados vínculos de cooperación o ayuda bilateral entre los Estados Unidos y la República de Bolivia (desde 2009 bajo la denominación de “Estado Plurinacional”).

Una temática, esta última, desarrollada por el presente autor en la tesis de maestría titulada “La cooperación internacional en Bolivia: un actor difuso de cuerpo presente. Las intervenciones bilaterales de España y Estados Unidos entre los años 2000 y 2009” (Universidad Nacional de Luján, 2015. Director: Dr. Bruno Fornillo)¹. Aquí se puntualiza sobre las llamadas políticas “contradrogas” desplegadas en el territorio boliviano. De este modo el objetivo principal en este trabajo es componer un cuadro

¹ A lo largo de la ponencia se recuperan algunos de sus principales desarrollos.

general de situación y desde allí vislumbrar la emergencia de nuevos interrogantes que sirvan como insumo para el desarrollo de nuevas investigaciones.

A lo largo de la década del '90 organismos oficiales estadounidenses como las agencias Drug Enforcement Administration (DEA), Narcotics Affairs Section (NAS) y United States Agency for International Development (USAID) tuvieron injerencia directa en esta problemática de extrema importancia al interior de la sociedad boliviana. Durante esos años estas instituciones externas, junto con el Estado boliviano, desarrollaron en el país andino/amazónico diversos programas destinados al control/erradicación de las plantaciones de coca y distintos proyectos en pos de lograr el denominado desarrollo alternativo a la producción cocalera.

Esta activa injerencia de los organismos estadounidenses y del Estado boliviano obtuvo como directa y rápida consecuencia la emergencia de un gran movimiento de resistencia por parte de los productores de hoja coca. Un movimiento que surgió de manera regional, sindical y defensiva pero que en pocos años logró proyectarse a escala nacional, adoptando una estrategia política ofensiva para la conquista del Estado central. En el presente trabajo, como primera instancia se aborda la ayuda estadounidense luego del triunfo de los revolucionarios del '52, seguidamente se realiza una síntesis acerca del contexto político boliviano durante las décadas de 1980 y 1990 y la aplicación de políticas estatales contra la producción de hoja coca, a continuación se analizan las intervenciones de la USAID y la DEA/NAS durante esos años, por último se explora sucintamente la emergencia/empoderamiento de nuevos actores sociales y políticos subalternos: el movimiento sindical cocalero con epicentro en el departamento de Cochabamba.

2. Relaciones entre Bolivia y EE.UU.

2.1 El crecimiento de la ayuda estadounidense luego del triunfo del nacionalismo revolucionario en 1952

A modo de brindar al lector la posibilidad de componer un cuadro global sobre la temática aquí estudiada, resulta un ejercicio necesario realizar al menos un breve *racconto* de las relaciones bilaterales entre ambos Estados americanos desde mediados del siglo XX.

Varios investigadores coinciden en señalar que desde los primeros años del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) hasta su final en 1964, Bolivia experimentó una extrema dependencia económica de los EE.UU.². Como escribe Mires, ello se manifestó en el absoluto predominio de las compañías norteamericanas sobre los recursos petrolíferos bolivianos, el control total del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el sistema financiero local y la cuantiosa ayuda para el “desarrollo” financiada por los EE.UU.

Para explicar a grandes rasgos este hecho resulta posible conjeturar que, a diferencia de lo sucedido con otros procesos políticos y gobiernos de corte ideológico “nacionalista/revolucionario” que tuvieron lugar en América Latina (por ejemplo en Guatemala), las máximas instancias gubernamentales estadounidenses no caracterizaron al gobierno del MNR como “comunista”. Contrariamente, fue catalogado como una fuerza de corte nacionalista moderada, capitalista, promotora de la inversión extranjera y modernizante cuya principal virtud residía en su capacidad política para mantener alejado o relegado del poder estatal al llamado “peligro comunista”. Por todo ello los Estados Unidos se mostraron dispuestos a apoyar política y económicamente al nuevo régimen boliviano³. Por su parte, hacia el año 1953, el gobierno boliviano encabezado por el presidente Paz Estenssoro debía afrontar una situación económica y financiera sumamente adversa signada por una de las tasas inflacionarias más altas del planeta y un alto endeudamiento externo. Frente a estas adversidades los grandes volúmenes de asistencia norteamericana se presentaban como una salida u opción más que atractiva. Con ese escenario de fondo la asistencia estadounidense hacia Bolivia mantuvo durante la totalidad de este período político niveles anuales altísimos que treparon en el año 1964 a 62 millones de Dólares. Así este país suramericano, junto al joven Estado de Israel, fue por entonces uno de los destinos preferenciales de la cooperación internacional de los Estados Unidos. La mayoría de esa asistencia era canalizada en

² Ver: Jean-Pierre Lavaud, *El embrollo boliviano. Turbulencias sociales y desplazamientos políticos 1952-1982* (La Paz: CESU-IFEA-hisbol, 1998); James Dunkerley, *Rebelión en las venas* (La Paz: Plural editores, 2003); Fernando Mires, *La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina* (Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2001); Ethan Earle, “El papel histórico de Estados Unidos en Bolivia y la ruptura diplomática de 2008” (tesis de Maestría en relaciones internacionales, FLACSO Argentina/Universidad de San Andrés, 2011).

No obstante, otro conjunto de investigadores interpreta las relaciones boliviano-norteamericanas de esos años como “un proceso de oposición de resistencia, presión y negociación, marcado también por la interdependencia (...) y la negociación diplomática para lograr un determinado nivel de control [de parte del gobierno boliviano] sobre sus relaciones con los EE.UU.”, en James Siekmeier, *La Revolución Nacional y los Estados Unidos 1952-1964* (La Paz: Plural editores, 2014).

³ Lavaud, op. cit., 355.

forma de ayuda que incluía donaciones para cooperación técnica, donación de alimentos, créditos para desarrollo y ayuda militar. Globalmente, según algunas estimaciones, la ayuda enviada desde el país del norte equivalía aproximadamente al 90% del presupuesto del Estado boliviano⁴. Como dato destacado cabe mencionar que a partir de 1965, consumado el golpe militar encabezado por el general Barrientos Ortuño que puso fin a doce años consecutivos de gobierno emenerista, si bien se mantuvieron elevados índices en asistencia militar, de forma general la ayuda norteamericana se redujo.

2.2 USAID: un creciente protagonismo

El accionar global de la estadounidense AID se retrotrae hasta la década de 1960 en el contexto panamericano de la “Alianza para el Progreso” y en el marco mundial de la “Guerra Fría”. Bajo la presidencia del demócrata John F. Kennedy el Congreso norteamericano sancionó la Ley de Asistencia Exterior, desde entonces, invirtiendo menos de 1% del Presupuesto Federal, la agencia es el principal órgano de ayuda exterior de los Estados Unidos.

“Antes de 1961 (...), los fondos para la ayuda de los Estados Unidos estaban divididos en organismos rivales: el Departamento de Estado, la Administración para la Cooperación Internacional, el Banco Exportación-Importación, la Comisión Fulbright, la División de Excedente de Alimentos del Departamento de Agricultura, etc. Kennedy decidió crear un solo Organismo de Ayuda al Exterior; así nació la AID de los Estados Unidos. El nuevo organismo inmediatamente emprendió la tarea de coordinar la ampliación de los programas externos de los Estados Unidos”⁵.

En sus primeros años de vida, hacia finales de la década de 1960, la agencia dirigió la mayor cantidad de sus fondos (Cooperación Bilateral Técnica y Financiera No Reembolsable) hacia cinco países: Corea, Laos, Nigeria, Tailandia y Vietnam, siendo en este último donde se destinaron los mayores porcentajes⁶. Empero, el organismo tuvo también desde sus comienzos una importante y sistemática presencia en distintos países y regiones de África, Asia, Europa y América Latina y el Caribe. Particularmente en

⁴ Ibid, 359-360.

⁵ North American Congress on Latin America, *Ciencia y neocolonialismo. Fundaciones Ford y Rockefeller, CIA, AID, Departamento de Estado y Universidades* (Buenos Aires: Ediciones Periferia, 1971), 76.

⁶ Ibid, 77.

esta última región se destacan Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Según refieren fuentes oficiales estadounidenses a nivel mundial la ayuda exterior proporcionada por los Estados Unidos tuvo siempre un doble objetivo:

“(…) apoyar los intereses de la política exterior americana, expandiendo la democracia y el libre mercado [creando mercados y socios comerciales] y al mismo tiempo mejorar la vida de los ciudadanos de los países en desarrollo”⁷.

Así, cabe destacar que la propia agencia hace explícito en su discurso público el carácter condicional, político, gubernamental, bilateral y estratégico de los fondos y bienes asignados⁸. De este modo, la cooperación internacional se constituyó para EE.UU. en una pieza básica de su estrategia de supremacía global y continental⁹.

A lo largo sus primeras cuatro décadas USAID ha priorizado distintas áreas de intervención: en la década de 1970 privilegió el enfoque sobre “necesidades humanas básicas” (salud, educación, alimentación y nutrición, etc.); la siguiente década priorizó el “apoyo en la estabilización de los sistemas financieros”, promoviendo en los distintos territorios del mundo los principios del “libre mercado”; y en los años ‘90 se centró en “desarrollo sostenible y democracia”.

En Bolivia la agencia comenzó sus actividades en los primeros años de la década de 1960, durante el período final de las “presidencias históricas” del nacionalismo revolucionario. Por entonces los principales objetivos (formales) de la AID se centraban “(…) en mejorar la administración pública, rehabilitar y expandir la industria minera, el desarrollo rural y agrícola, y los recursos humanos, expandir el sector industrial y crear un clima más favorable para la inversión y una estructura para el ahorro”¹⁰.

Dos décadas después, en el contexto de las reformas estructurales iniciadas con la aplicación de la Nueva Política Económica (NPE), USAID fue un actor central en la vida institucional y social boliviana, siendo el principal donante en el orden bilateral¹¹. A modo de ejemplo: entre los años 1987 y 1992 la agencia concentró el 14% de la

⁷ Embajada de los Estados Unidos en Caracas, sitio web oficial, 2014.

⁸ Paula Aguilar, “El rol de la USAID en América Latina y el Caribe (2000-2006)”, en *Las deudas abiertas en América Latina*, coord. Pablo Gentili (Buenos Aires: CLACSO, 2012) 13-67 [versión electrónica].

⁹ Antonio Rodríguez-Carmona, *El proyectorado. Bolivia tras 20 años ayuda externa* (La Paz: Plural editores, 2009), 134.

¹⁰ USAID/Bolivia, *Construyendo un futuro mejor. USAID en Bolivia 1961-2013* (2013, 15), http://photos.state.gov/libraries/bolivia/337500/usaidsuccessstories/bolivia%20legacy_spanish_highres.pdf (consultada en marzo de 2017).

¹¹ Según documentos de la propia agencia, como parte de la condena internacional al régimen, durante el gobierno de facto de Luis García Mesa Tejada (1980/81) Estados Unidos redujo sensiblemente su ayuda.

ayuda externa que recibió el país andino-amazónico, lo que equivale a un promedio anual estimado en 97 millones de Dólares¹². Sobre la injerencia de los organismos estadounidenses en dicho contexto se profundizará en las próximas líneas.

3. Bolivia hacia finales del siglo XX: hegemonía del capitalismo neoliberal, pacto por la democracia y aumento de la dependencia externa

El año 1985 se transformó en un momento de inflexión para la sociedad boliviana: se produjo la culminación del llamado “Estado nacionalista”, tributario o heredero del proceso revolucionario de 1952, y junto con ella “se pondría fin al denominado capitalismo de Estado que con vaivenes, había sobrevivido desde la revolución”¹³.

En agosto de 1985 retornó a la presidencia del país Víctor Paz Estenssoro, líder histórico del MNR. Con el objeto de suprimir el déficit financiero del Estado, controlar la hiperinflación y atraer capitales extranjeros, Paz Estenssoro mediante la promulgación del Decreto Supremo N° 21.060 puso en marcha la llamada Nueva Política Económica (NPE). Una ingeniería económica inspirada en una perspectiva monetarista de la economía, conocida años más tarde como las “reformas estructurales de primera generación”.

La NPE estableció un amplio conjunto de medidas reformistas que habilitaron a “una radical transformación del Estado y sus parámetros de acción”¹⁴, sobre la base de cinco columnas vertebrales: fijación de un tipo de cambio estable y unificado, reforma fiscal, reducción del gasto público (principalmente a través de la reducción del empleo público), reestructuración de la deuda externa y obtención de una fluida asistencia externa financiera de carácter concesional que por entonces ofertaban tanto gobiernos extranjeros como instituciones multilaterales. De esta manera, con el acuerdo o pacto parlamentario establecido por los partidos mayoritarios como el propio MNR, ADN¹⁵ y

¹² Fernando De La Cruz Prego, “Ayuda externa en Bolivia (1985-2003): auge y caída del neoliberalismo”, en *Cátedra de cooperación internacional y con Iberoamérica* (Universidad de Cantabria, 2011), 15, http://www.ciberoamericana.com/pdf/DT_2011_01.pdf (consultada en enero de 2014).

¹³ Pablo Stefanoni, *Qué hacer con los indios... Y otros traumas irresueltos de la cotidianidad* (La Paz: Plural editores, 2010), 137.

¹⁴ Antonio Mayorga Ugarte, (2007) *Gonismo discurso y poder* (La Paz: Plural editores, 2007), 62.

¹⁵ Acción Democrática Nacionalista liderada por Banzer Suárez.

MIR¹⁶, el Decreto 21.060 se transformó en un verdadero programa político de contenido neoliberal e incluso se situó por encima de muchas de las leyes vigentes¹⁷.

Así, en este modificadorio y trascendental 1985 nació la denominada “democracia pactada” o “coalicionismo”. Una especie de círculo cerrado de alianzas parlamentarias que posibilitó que tres partidos políticos se alternasen en el Poder Ejecutivo entre 1985 y 2003. Estos fueron: el MNR de Paz Estenssoro (1985-1989) y Sánchez de Lozada (1993-1997/2002-2003), el MIR de Paz Zamora (1989-1993) y la ADN de Banzer Suárez y Quiroga Ramírez (1997-2002).

Una de las consecuencias inmediatas, y tal vez más profundas, de la aplicación de este programa neoliberal fue el cierre de las minas estatales deficitarias y el despido (formalmente “relocalización”) de más de 20 mil trabajadores mineros, sobre una planta cercana a los 30 mil que tenía por entonces la Corporación Minera Boliviana (COMIBOL). Esto derivó en el incremento de la desocupación y fundamentalmente en “la muerte de la condición obrera del siglo XX”¹⁸. El proletariado organizado en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) -piedra angular de la COB- era, por capacidad de acción, articulación y movilización, hasta ese momento la principal fuerza social subalterna del país. Con la casi total desaparición del sector más combativo, compacto y politizado de los trabajadores se produjo un notable debilitamiento de la COB¹⁹. “Como resultado (...) los mineros despedidos fueron ‘relocalizados’ a regiones alejadas de sus campamentos históricos. Muchos fueron a la ciudad de Cochabamba y a los trópicos cercanos donde se cultiva la coca”²⁰.

Bajo ese escenario inaugurado a mediados de la década del ‘80, varios investigadores²¹ arriban a la siguiente tesis: desde entonces y hasta los primeros de años del siglo XXI,

¹⁶ Movimiento de Izquierda Revolucionaria liderado por Paz Zamora.

¹⁷ Pablo Villegas, “La desnacionalización del Estado boliviano y sus recursos naturales”, en AA.VV, *Las multinacionales españolas en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de cambio* (Cochabamba: CEDIB-OMAL-PAZ con dignidad, 2010), 18.

¹⁸ Álvaro García Linera, *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia* (Buenos Aires: CLACSO, Prometo libros, 2008).

¹⁹ Pablo Villegas, op. cit., 19.

²⁰ Sándor John, *El trotskismo boliviano. Revolución permanente en el Altiplano* (La Paz: Plural editores, 2016), 310.

²¹ Ver: Álvaro García Linera, “Del Estado neoliberal al Estado plurinacional autonómico y productivo”, en *Discursos y ponencias del Ciudadano Vicepresidente Álvaro García Linera*, año 2, Nº 5 (La Paz: Presidencia del H. Congreso Nacional. Vicepresidencia de la Republica, 2009) [versión electrónica]; Roberto Fernández Terán, *Gas, petróleo e imperialismo en Bolivia* (La Paz, Plural editores, 2009); De La Cruz Prego, op. cit.; Jennie De Grave, “Estado Boliviano y cooperación internacional. Malestar, responsabilidades, aperturas”, en *Informe Nacional sobre desarrollo humano en Bolivia* (La Paz: PNUD, 2007),

http://www.centrodesarrollohumano.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1385 (Consultada en diciembre de 2013).

se produjo una alianza de fondo entre la cooperación internacional y los gobiernos nacionales que se sucedieron durante ese período. En ese marco distintos organismos multilaterales y bilaterales vinculados a la cooperación internacional se transformaron en un componente integral del renovado entramado institucional de Bolivia. Instituciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la propia USAID formaron parte central en la arquitectura del reformado Estado boliviano²².

A partir del año 1993, el gobierno nacional del entonces presidente Sánchez de Lozada, quien supo aliarse con sectores izquierdistas e indigenistas, profundizó las reformas estructurales implementadas por Paz Estenssoro. Así, se pusieron en marcha las llamadas “reformas de segunda generación” que incluían: capitalización (en los hechos privatización) de las principales empresas del Estado, ampliación de la participación electoral, descentralización administrativa del Estado, reforma agraria, reforma constitucional, etc. Un rediseño estatal que se sustentó sobre la base de tres grandes líneas estratégicas imbricadas:

1. Profundizar la política económica de desnacionalización y de corte privatista.
2. Otorgarle un “rostro más humano” al país mediante el reconocimiento formal del carácter multiétnico y pluricultural de la población boliviana.
3. Quitar la acción socio-política de las calles.

Buena parte de los cooperantes internacionales apoyaron este cambio institucional, estableciéndose una alianza de fondo entre los donantes y el gobierno boliviano. Mediante la condonación de deuda externa como mecanismo de coacción, diferentes organismos multilaterales y bilaterales tuvieron enormes implicancias en la sociedad boliviana. A modo de cuantificar la importancia de los organismos de ayuda externa, como datos estadísticos cabe destacar que entre los años 1987 y 2005, la ayuda externa representó en promedio entre el 7 y el 12% del PIB anual del país. Sus picos máximos fueron en 1989 y 1992 donde superó el 12%²³. También durante esos años el financiamiento percibido en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo significó aproximadamente el 90% de la inversión pública en Bolivia²⁴.

²² Fernández Terán, op. cit., 69.

²³ De Grave, op. cit., 7.

²⁴ Rodríguez Carmona, op. cit., 18.

4. Políticas de Estado sobre producción de la hoja de coca: Ley 1008, desarrollo alternativo y criminalización de los productores

Entre 1985 y los primeros años del siglo XXI, bajo la llamada “guerra contra las drogas” impulsada por los EE.UU. a nivel continental²⁵, los sucesivos gobiernos bolivianos que integraron el Pacto por la Democracia impulsaron un conjunto de programas y proyectos destinados a la erradicación y sustitución de los cultivos de coca, tales como: el Plan Trienal de Erradicación de Cultivos de Coca (1985-1989); el Plan Coca por Desarrollo (1989); el Plan Opción Cero (1994); y el Plan por la Dignidad (1997-2002)²⁶.

La implementación de estos programas a lo largo del tiempo significó en los hechos la combinación de imposiciones, negociaciones, resistencias y una gran represión estatal para con los productores de la hoja de coca. Los principales focos represivos estuvieron situados en el Chapare, una provincia perteneciente al departamento de Cochabamba.

Bajo ese contexto, en el año 1988 el parlamento sancionó la “Ley N° 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas²⁷”. Esta Ley tenía como principio rector constituirse en el marco legal encargado de regular las políticas estatales en relación a la coca²⁸. Desde su puesta en vigencia la legislación generó el rechazo y la resistencia por parte los productores rurales, ya que desconocía todos los convenios previos celebrados entre el Estado y las organizaciones cocaleras o campesinas²⁹.

En términos generales la 1008 estableció tres zonas de producción: a) Una zona de producción tradicional en los Yungas de La Paz y de Vandíola (Cochabamba); b) Una zona de producción excedentaria en transición en el Trópico de Cochabamba (debía sustituirse gradualmente por otros cultivos); y c) Una tercera zona considerada de producción ilícita que abarcaba el resto del territorio del país no contemplado en las zonas anteriores (de erradicación obligatoria y sin ningún tipo de compensación).

²⁵ Sus orígenes pueden rastrearse desde la presidencia de Richard Nixon.

²⁶ Diario La Nación (18/07/2010, Chile), <http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100717/pags/20100717195743.html> Consultada en febrero de 2017.

²⁷ El 8 de marzo de 2017 Evo Morales promulgó la Ley (906) General de la Coca, que reemplaza a la Ley 1008. “Esta nueva ley amplía de 12000 a 22000 las hectáreas de cultivo de la hoja de coca y prácticamente duplica la cantidad de hectáreas legales que pueden ser cultivadas en el país” (Periódico mensual Pukara, N° 128, abril de 2017).

²⁸ Pablo Stefanoni, y Hervé Do Alto, *Evo Morales de la coca al Palacio. Una oportunidad para la izquierda indígena* (La Paz: Malatesta, 2006).

²⁹ Fernando Salazar Ortuño, *De la coca al poder. Políticas públicas de sustitución de la economía de la coca y pobreza en Bolivia [1975-2004]* (Buenos Aires: CLACSO-CROP, 2008).

Si bien ya la Ley contiene varios elementos coercitivos, tendientes a la estigmatización/criminalización de los productores cocaleros, en los hechos ni siquiera fue respetada en su aplicación por propio el Estado boliviano. En este sentido, en 1997 los diputados “cocaleros” de la bancada del partido Izquierda Unida (Evo Morales, Román Loayza, Félix Sánchez y Néstor Guzmán) presentaron al Congreso Nacional un extenso documento bajo el denominativo de “Proscripción acusatoria” donde denunciaron la sistemática violación a los derechos humanos perpetrada por el Estado a los campesinos del Trópico: “No sólo se violó lo substancial de la Constitución Política del Estado, sino también la leyes de la República, en particular la Ley 1008. (...). En ninguna parte de la Ley 1008, se sostiene que la producción excedentaria de coca, por ser tal, es cocaína. Tampoco la Ley concluye que el productor de la coca excedentaria es narcotraficante (...). No habla de apresarlo, de torturarlo, encarcelarlo y mucho menos por poseer una producción ilícita debe apresado o asesinado³⁰”.

Así los gobiernos neoliberales pusieron en práctica una doctrina de tipo militar contra los productores y sus organizaciones. Para ello crearon una fuerza especial, la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), asistida de modo directo por la DEA, y fundamentalmente identificaron o asimilaron “a la agrupación campesina de productores de coca como una organización delincuencia, criminal, terrorista y dictatorial de narcotraficantes”³¹. A modo de ejemplo, en el año 2002 ante un conflicto entre el gobierno y las organizaciones campesinas que se oponían al cierre de un mercado de comercialización de coca en Sacaba (provincia del Chapare), el ministro de información del gobierno boliviano, Mauro Bertero, declaraba ante la prensa: “Quien está provocando estos delitos es la narcoguerrilla que pretende el cultivo de coca ilegal en el Chapare para seguir elaborando droga. No existe posibilidad de diálogo si Evo Morales no entrega a los francotiradores y devuelve a los policías y militares secuestrados³²”.

Esta caracterización se correspondía o estaba alineada directamente con aquella realizada por los organismos oficiales de los EE.UU., algo que quedó de manifiesto ante

³⁰ “Proscripción acusatoria. Juicio de responsabilidades por violación a los derechos humanos a los señores Carlos Sánchez Berzain y Víctor Hugo Canelas” (La Paz, octubre de 1997). En Filemón Escóbar, *De la Revolución al Pachakuti. El aprendizaje del Respeto Recíproco entre blancos e indios* (La Paz, GarzAzul, 2008).

³¹ Salazar Ortuño, op. cit., 187.

³² BBC Mundo.com (18/01/2002),

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1768000/1768918.stm Consultada en febrero de 2017.

la opinión pública durante la campaña presidencial de Evo Morales en el año 2002³³. En aquella oportunidad el embajador estadounidense en Bolivia, Manuel Rocha, acusó públicamente al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) de narcotraficante y de pretender instaurar un narco-gobierno: “Si [los bolivianos] eligen a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína importante, ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de los Estados Unidos a Bolivia (...). Una Bolivia dirigida por gente que se ha beneficiado del narcotráfico no puede esperar que los mercados de los Estados Unidos se mantengan abiertos para los exportadores tradicionales de textiles³⁴”.

Producto de esa sistemática política de criminalización y militarización entre 1985 y 2004 se registraron centenares de violaciones a los derechos humanos en el Trópico de Cochabamba, a saber:

- 95 civiles muertos y asesinados;
- 446 civiles heridos;
- 598 torturados y flagelados por fuerzas militares, mercenarias y parapoliciales;
- 4134 personas detenidas ilegalmente y 13 violaciones³⁵.

En paralelo a esta fuerte política represiva, hacia fines del siglo XX los programas de sustitución de coca (conocidos bajo el rotulo de “desarrollo alternativo”) por otros cultivos comerciales como bananas, palmitos y cítricos no habían logrado superar la fase piloto o experimental. Los resultados mostraban una baja incidencia de esos nuevos cultivos en la economía campesina de Cochabamba³⁶. Además la sustitución era considerada por los productores locales una opción antieconómica o desventajosa.

Para concluir con esta parte de la ponencia cabe señalar que EE.UU. fue decisivo en la elaboración y aplicación de esas políticas, siendo un actor central en el entramado político e institucional del reformado Estado boliviano a partir de 1985 y la aplicación de la NPE. Desde allí, y por al menos durante las dos subsiguientes décadas, “la lucha contra el narcotráfico llegó a constituirse en una parte esencial de las relaciones

³³ En 1989 EE.UU. dio a conocer el “Plan Bennett” cuya propuesta central era la erradicación de cultivos de coca mediante la militarización en las zonas de producción, identificando a la producción de cultivos de hoja de coca como el origen del problema que genera la producción de drogas y la red del narcotráfico. Salazar Ortuño, op. cit.

³⁴ Declaraciones de Manuel Rocha, 26/6/2002. En Stefanoni y Do Alto, op. cit., 77.

³⁵ Salazar Ortuño, op. cit., 214-217. Información reconstruida según documentos del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, material de inteligencia del Ejército y Policía, datos de investigadores y prensa boliviana.

³⁶ Roberto Laserna, “Desarrollo Alternativo en Bolivia. Análisis preliminar de una Experiencia inconclusa” (2000), <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/rjave/paneles/laserna.pdf> (consultada en abril de 2012).

bilaterales Bolivia-Estados Unidos y en una política a través de la cual el gobierno estadounidense mantuvo su presencia militar en el país”³⁷.

5. La injerencia de los Estados Unidos: la ayuda internacional como vector privilegiado

Tal como fue señalado más arriba, desde la segunda parte del siglo XX la cooperación internacional se constituyó para los EE.UU. en una pieza clave dentro de su estrategia para obtener la hegemonía continental y global³⁸. Una ayuda externa de carácter estratégico, condicional y político/ideológico considerada por los propios organismos oficiales estadounidenses como un instrumento de su política exterior, un componente de su seguridad nacional y de sus intereses comerciales. De esto modo, mediante su política de cooperación el país del norte no sólo buscó acceder a las altas esferas del poder en cada país receptor de su ayuda sino también “a la vida cotidiana de las comunidades locales, construyendo sentidos, valores e impulsando [distintas] prácticas”³⁹.

Desde mediados de la década de 1980 y hasta los años 2000 las políticas de cooperación estadounidenses en Bolivia se desarrollaron en un contexto signado por el ingreso de una gran cantidad de empresas de capitales estadounidenses, tales como: Amoco, Enron, Dominion Energy, Energy Initiatives, Constellation Energy, Allied Deals y Bechtel Enterprise Holding⁴⁰. Durante estos años, a través de USAID, la ayuda se orientó hacia los programas de “desarrollo sostenible” (crecimiento económico, productividad y competitividad) y de “fortalecimiento de las instituciones democráticas” (gobernabilidad)⁴¹.

Además los organismos AID, DEA y NAS tuvieron injerencia directa en el cultivo de *Erythroxylum coca*: “USAID/Bolivia ha establecido los siguientes objetivos: (1) usar los medios y avances alcanzados por los diferentes proyectos de USAID en otras áreas

³⁷ Jessica Suárez Mamani, “Democracia y lucha contra el narcotráfico: Instrumentos para desacreditar los gobiernos progresistas”, en *Bolivia Leaks: La injerencia política de los Estados Unidos contra el Proceso de Cambio 2006-2010*, coord. Juan Ramón Quintana Taborga (La Paz: Ministerio de la Presidencia, CLACSO, 2016), 111.

³⁸ Rodríguez Carmona, op. cit., 134.

³⁹ Sonia Winer, “La intervención extranjera en el Paraguay y el rol de la USAID”, en *rcci.net/globalización* (2012), <http://rcci.net/globalizacion/2012/fg1494.htm> (consultada en junio de 2014)

⁴⁰ Martínez Portugal, “Y llegaron los noventa... La entrada de las multinacionales en Bolivia”, en *Las multinacionales españolas en Bolivia. De la desnacionalización al proceso de cambio*. AA.VV (Cochabamba: CEDIB-OMAL-PAZ con dignidad, 2010); Fernández Terán, op. cit.

⁴¹ Eduardo Gamarra, “Gobierno y políticas”, en *Un Estudio de País. Bolivia*. División de Investigación Federal (Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 1989) <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/botoc.html> (consultada en abril de 2014).

para colaborar al Gobierno Boliviano en programas de erradicación y control de plantaciones coca, (2) llevar adelante programas de desarrollo social y económico en la zona del Chapare y en los altos valles cochabambinos para facilitar la transición de la producción campesina de coca hacia otros productos⁴²”. Mientras tanto DEA y NAS otorgaban asistencia técnica, entrenamiento militar y servicios de apoyo a fuerzas locales especializadas como la UMOPAR.

Particularmente la AID, en tanto principal organismo de asistencia externa de los EE.UU., desempeñó un rol de vanguardia en las políticas anti-narcóticos, destinando allí gran parte de su ayuda técnica y económica, estimada en más de 270 millones de Dólares entre el período 1983 y 2013⁴³. Es claro que, tal como manifiesta Rodríguez Carmona⁴⁴, durante los gobiernos nacionales anteriores al MAS toda la política de la lucha contra el narcotráfico estaba vinculada a la cooperación norteamericana con sus diferentes unidades.

En ese sentido varios investigadores postulan como tesis central que la lucha contra el narcotráfico fue, en verdad, para los EE.UU. una estrategia para legitimar su presencia e intervención política/militar en determinadas zonas del mundo, particularmente en América Latina: “(...) partiendo de la premisa de resguardar su seguridad nacional, Estados Unidos ha utilizado la lucha contra el narcotráfico como una estrategia para fortalecer su presencia militar en los países de la región”⁴⁵. La estrategia contradrogas “significó en la práctica la prolongación del control político en todo el continente americano”⁴⁶.

Para finalizar con esta parte del escrito cabe explicitar que a lo largo de esta coyuntura histórica, en la que distintos organismos oficiales de asistencia externa de los Estados Unidos ejercieron un rol protagónico en el quehacer de la República de Bolivia, los distintos gobiernos nacionales integrantes de la “democracia pactada” (MNR, MIR y ADN) no fueron simples receptores de las políticas impulsadas por el país del norte. Contrariamente también ejercieron un rol activo y decisivo en la construcción de una compleja trama de relaciones de poder entre distintos actores internacionales y locales que le otorgaron al país andino-amazónico una nueva morfología desde mediados de la década de 1980. Instituyéndose así una alianza estructural entre los cooperantes

⁴² USAID Bolivia, “Programa de Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos en Bolivia”, 1989, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdabb198.pdf (consultada en agosto de 2014).

⁴³ USAID Bolivia, *Construyendo un futuro mejor...*, op. cit.

⁴⁴ Entrevista con Rodríguez-Carmona (Ciudad de La Paz, julio de 2014).

⁴⁵ Suárez Mamani, op. cit., 111.

⁴⁶ Salazar Ortuño, op. cit., 157.

internacionales, entre los que EE.UU. ocupó un lugar principal, y los sucesivos gobiernos nacionales bolivianos.

6. La emergencia y empoderamiento de nuevos actores sociales subalternos: el movimiento sindical cocalero

*La coca [se transformará] en el simbolismo fundamental de las naciones oprimidas del país...*⁴⁷

La sistemática política de criminalización y represión ejercida por el Estado boliviano junto con organismos estadounidenses provocó la reacción y el enfrentamiento directo con las principales organizaciones y sindicatos de campesinos cultivadores de hoja coca. Algunos autores sostienen que en la provincia cochabambina del Chapare rigió durante los años finales del siglo XX, paralelamente al Estado de derecho, una zona de excepción en la que no tenían vigencia derechos humanos elementales⁴⁸.

La notoria injerencia de los EE.UU. provocó como correlato un visible repudio y un fuerte sentimiento “anti-imperialista” o “anti-norteamericano” en amplios sectores del campesinado boliviano, más acentuado en los cultivadores de coca y en sus organizaciones sindicales, espacio desde “el cual Evo Morales irradió su liderazgo nacional”⁴⁹. Un sentimiento que se puede sintetizar en la expresión popular de protesta entonada en innumerables movilizaciones por miles de campesinos de Bolivia: “¡Kawsachun coca, Wañuchun yanquis!” (Viva la coca, Mueran o Fuera los yanquis): “Resoluciones del ampliado de la CSUTCB SHINAHOTA [Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia]: 1. Ratificar la defensa de la planta de coca contra la erradicación forzada. 2. Rechazar y denunciar la utilización de herbicidas para la erradicación forzada. 3. Estado de emergencia y movilización general del movimiento sindical campesino por la presencia de los soldados agentes norteamericanos y [pedimos] su expulsión”.

Empero, como señala Stefanoni “pocos auguraron que la emergencia del movimiento sindical cocalero a mediados de los años ochenta en la región del Chapare alteraría tan profundamente el mapa político y social boliviano, dando origen a nuevas identidades

⁴⁷ Escóbar, op. cit., 195.

⁴⁸ Moira Zuazo, *¿Cómo nació el MAS? La ruralización de la política en Bolivia* (La Paz: Fundación Ebert, 2009).

⁴⁹ Stefanoni y Do Alto, op. cit., 43.

políticas y mostrando gran capacidad de interpelación sobre los sectores subalternos”⁵⁰. No fue una construcción organizativa sencilla, todo lo contrario. Como narra Filemón Escóbar⁵¹, se trató de un trabajo político sistemático, paciente, obstinado y por momentos imperceptible para propios y extraños: “Nuestro trabajo de seminarios y de campañas, desde 1984 hasta el 2002, fue incansable”⁵². Un lento camino signado por la “politización de la coca”⁵³. Será justamente la criminalización de los cocaleros el elemento aglutinador del sujeto campesino-indígena como sujeto político.

En ese largo y sinuoso camino de “politización de la coca”, que recorrerá desde lo local a lo nacional y del corporativismo sindical hasta la defensa de la soberanía del país⁵⁴, dos momentos decisivos fueron el VI Congreso Ordinario de la CSUTCB realizado en Cochabamba en 1994 y el I Congreso de Tierra y Territorio en 1995, donde las organizaciones campesinas (con hegemonía de los cocaleros) aprobaron la creación de un propio Instrumento Político (IP) de liberación, anticapitalista y anticolonial⁵⁵. A partir de allí el IP obtuvo un rápido crecimiento electoral tanto en los territorios municipales como en el parlamento nacional donde por ejemplo en 1997, presentándose bajo la denominación de Izquierda Unida, obtuvo cuatro diputaciones nacionales: “bajo el simbolismo de la hoja de coca llegamos al parlamento (...). “En el año 1999, el IP (...) ha comenzado a tomar ya cuerpo nacional (...). El avance es positivo pero insuficiente”⁵⁶.

El crecimiento del IP, en un contexto de grandes movilizaciones callejeras en distintos lugares de Bolivia, en las instancias políticas nacionales era cada vez más notorio y significativo. Una expresión de ello fueron las Elecciones Generales celebradas en 2002, cuando la fórmula encabezada por Evo Morales como primer mandatario, arrojó resultados sorprendentes dejándolo a tan solo unos pocos sufragios de desventaja

⁵⁰ Pablo Stefanoni, “El nacionalismo indígena como identidad política: La emergencia del MAS-IPSP (1995-2003)”, en Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe (Buenos Aires: Programa Regional de Becas CLACSO Programa Regional de Becas, 2003), 334 <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/levy/11stef.pdf> (consultada en enero de 2014).

⁵¹ Escóbar integró el Partido Obrero Revolucionario (POR) y luego de una larga trayectoria como dirigente de la FSTMB, se convirtió en asesor de las 6 Federaciones de productores cocaleros del Trópico de Cochabamba. Sándor John, op. cit.

⁵² Escóbar, op. cit., 195.

⁵³ Stefanoni y Do Alto, op. cit.

⁵⁴ Por ejemplo en ese camino con grandes debates internos, en cuanto a la táctica y estrategia política, algunos dirigentes cocaleros evaluaban la posibilidad de que los Comités de Autodefensa evolucionen hacia una guerrilla rural.

⁵⁵ Natalia Wiornos, Los movimientos sociales y el primer gobierno de Evo Morales. Relaciones e implicancias entre CSUTCB, CIDOB, gobierno y Estado. Tesis de Maestría en Ciencias Sociales con Mención Historia Social (Universidad Nacional de Luján/Argentina, 2016).

⁵⁶ VII Congreso Nacional de la CSUTCB. En Escóbar, op. cit.

respecto a su rival Sánchez de Lozada del MNR. Además el MAS obtuvo en aquella oportunidad 35 legisladores nacionales. Tan sólo tres años después, en las elecciones presidenciales anticipadas del 2005, Morales será elegido presidente de la República con el 53,74% de los votos.

Así un movimiento regional que surgió con características netamente periféricas, sindicales y defensivas en poco más de una década logró proyectarse a escala nacional (mediante una estrategia política ofensiva para la conquista del Estado) y se convirtió un actor central/determinante en la conformación del llamado “bloque social y popular anti-neoliberal”⁵⁷ conformado desde el año 2000 con motivo de la Guerra del Agua en Cochabamba.

7. Algunas conclusiones y nuevos interrogantes

A la luz de comprender el triunfo electoral de Evo Morales Ayma en diciembre de 2005, resulta central revisar la cuestión cocalera. En este sentido, a lo largo de esta producción se logró elaborar un cuadro general en torno a las políticas estatales implementadas en Bolivia de “guerra contra las drogas” en la década de 1990 y sus consecuencias más visibles en el corto y mediano plazo: la emergencia del movimiento cocalero como un nuevo actor social subalterno con gran capacidad para aglutinar política y discursivamente al resto de las clases populares bajo un programa de transformación de la sociedad y el Estado.

Desde el gobierno de Paz Estenssoro en 1985 y hasta el de Mesa Gisbert en 2005, los gobiernos neoliberales implementaron una batería de programas dirigidos a eliminar buena parte de la producción de hoja de coca existente en el país. Para ello utilizaron mecanismos de represión directa y violencia simbólica hacia los productores rurales cocaleros, mediante la ejecución de una doctrina de tipo militar. Los principales focos represivos estuvieron situados en la provincia cochabambina del Chapare. En ese contexto represivo las asociaciones sindicales de cocaleros fueron caracterizadas desde el propio Estado como organizaciones criminales, terroristas y narcotraficantes. Una caracterización que estaba en absoluta correspondencia con la realizada por los organismos de los EE.UU. como USAID y DEA.

⁵⁷ Raúl Prada Alcoreza, (2011) “En torno al TIPNIS”, <http://horizontesnomadas.blogspot.com.ar/2011/09/en-torno-al-tipnis-raul-prada-alcoreza.html> (consultada en enero de 2014).

Resulta un hecho observable que los Estados Unidos fueron decisivos en la elaboración y aplicación de esas políticas. La denominada “lucha contra el narcotráfico” se constituyó durante la década del ‘90 como un componente central en las relaciones bilaterales entre Bolivia y EE.UU., posibilitándole a este último no sólo una profunda injerencia en las decisiones políticas internas de Bolivia sino también una presencia militar en esta región sur del continente americano. Se instituyó así una alianza estructural, de fondo, entre los cooperantes internacionales, donde EE.UU. jugó un rol preponderante, y los gobiernos de Bolivia pertenecientes a la Democracia Pactada.

La sistemática represión ejercida por el Estado generó un enfrentamiento directo con los sindicatos de productores de hoja de coca. En esa coyuntura fue creciendo firmemente un movimiento cocalero que logró con carácter excepcional, poniendo en funcionamiento una táctica política electoral y de alianzas para la conquista del Estado central mediante la creación del IP, proyectarse a escala nacional y convertirse en un actor determinante en la conformación del “bloque social y popular anti-neoliberal” conformado en el año 2000.

Por último, resulta propicio dejar algunas preguntas abiertas que sirvan como insumos para pensar el desarrollo de futuras investigaciones: ¿Por qué la táctica de creación y de posterior desarrollo del IP logró imponerse sobre otras formas de organización política al interior del movimiento sindical cocalero? ¿Cómo fue la “etnografía” de ese proceso? ¿Qué rol jugaron allí los intelectuales?